JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Cuatro (04) de octubre de dos mil trece (2013)

Medio de control:	NULIDAD
Demandante:	GUSTAVO DE JESUS LOPEZ OSORIO
Demandado:	MUNICIPIO DE ARGELIA
Radicado:	05-001-33-33-012-2013-00719-00

Interlocutorio No. 316

ASUNTO: RECHAZA DEMANDA POR CADUCIDAD.

El señor GUSTAVO DE JESÚS LÓPEZ OSORIO a través de apoderado judicial, interpone demanda en ejercicio del medio de control de "**NULIDAD** y reparación directa de perjuicios" invocando el artículo 137, 140, 164 y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y para el efecto solicita lo siguiente:

- ***“Declarar La Nulidad de los actos administrativos 036, 049 de 2010 y 059 de 20/08/2011***
- ***Declarar la nulidad de los demás actos que se deriven de estos actos administrativos (como son escrituras, registro inmobiliario, catastrales, etc.).***
- ***Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a el Municipio de Argelia Antioquia de los perjuicios causados al Demandante con motivo de la promulgación de los actos administrativos 036, 049 de 2010 y 059 de 20/08/2011.***
- ***De conformidad con el Art. 163 de la Ley 1437 de 2011, procedo a individualizar los actos administrativos cuya nulidad se pretende:***
 - ***Declarar La Nulidad de la Resolución 049 de 29 de Agosto de 2010.***
 - ***Declarar La Nulidad de la Resolución 036 de 17 de Julio de 2010.***
 - ***Declarar La Nulidad de la Resolución 059 de 20 de agosto de 2011.***
 - ***Declarar La Nulidad de la Escritura 110 de agosto 10 de 2010, Notaria única de Argelia Antioquia.***
 - ***Declarar La Nulidad de la Matricula inmobiliaria Nro. 028-28037, expedida el 24 de agosto de 2010 en la Oficina de Registros de I.I.P.P. de Sonson, Antioquia.***

- *Condenar al Municipio de Argelia Antioquia a pagar al demandante la suma de Cien (100) S.M.L.M.V. en su condición de víctima.*
- *Condenar al Municipio de Argelia Antioquia a pagar gastos y costas del proceso. "*

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de la admisión o rechazo del medio de control de la referencia, de conformidad con lo consagrado en el artículo en el artículo 162 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES:

1. Previo a resolver sobre la admisión de la presente demanda, procederá el Despacho a determinar si la acción procedente es la nulidad como lo pretende la parte actora o por el contrario, cuál sería el medio de control procedente para el presente caso.

Establece el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo lo siguiente:

"Art. 137.- Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. *Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.*
2. *Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.*
3. *Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.*
4. *Cuando la ley lo consagre expresamente.*

Parágrafo.- Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente". Subrayas propias.)

Y el artículo 138 ibídem señala:

"ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel."

Ahora, la demanda se dirige a obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 049 del 29 de Agosto de 2010, Resolución 036 de 17 de Julio de 2010, Resolución 059 de 20 de agosto de 2011, de la Escritura 110 de agosto 10 de 2010 expedida por la Notaria Única de Argelia Antioquia, y de la Matricula inmobiliaria Nro. 028-28037, expedida el 24 de agosto de 2010 en la Oficina de Registros de I.I.P.P. de Sonsón, Antioquia.

En el caso en estudio, considera esta agencia judicial que no procede la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, como lo pretende la parte actora, toda vez que lo que se impugnan son actos administrativos subjetivos, que crean situaciones jurídicas concretas, personales e individuales, ya que los afectados con la expedición del mismo son determinables según las resoluciones, la escritura pública y la matricula inmobiliaria cuya nulidad se pretende.

Sobre la procedencia de la acción de nulidad para demandar actos de contenido particular ha señalado el Consejo de Estado: *"La teoría de los motivos y finalidades, posición reiterada por esta Corporación desde la sentencia de agosto 10 de 1961, no contradice lo anterior en la medida en*

que se aplique conforme a los supuestos analizados en las distintas sentencias y confirmadas en la última citada.

Ahora bien, cuando la acción de simple nulidad se dirige contra actos de contenido particular y concreto la tesis opera de dos formas : a) si la declaratoria de nulidad no conlleva el restablecimiento del derecho particular lesionado la acción puede ejercerse inclusive por el titular del derecho y b) si la sentencia prosperara y determinara el restablecimiento automático del derecho particular lesionado, la acción es inadmisibile, salvo que se intente dentro del término de caducidad previsto en la ley. ”¹

Como lo pretendido por la parte demandante es obtener la nulidad de aquellos actos administrativos mediante los cuales se cedió unos bienes inmuebles, que aducen son de su propiedad, al municipio de Argelia y mediante los cuales finalmente se entrega la propiedad de dicho predio al señor Donald Valencia Valencia, lo que indica que de ninguna manera estamos frente a un acto de carácter general o frente un acto de contenido particular que pueda ser demandado en ejercicio del medio de control de nulidad, según lo preceptuado en el **artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011**.

No advierte el Despacho que con la nulidad de los actos particulares demandados se busque únicamente el mantenimiento del orden jurídico o que por su contenido o trascendencia comporte un especial interés para la comunidad o incida de manera trascendental en el bienestar social, en la economía o desarrollo nacional, por lo que como se ha dicho, lo que procede es la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Tal y como lo dispone el **parágrafo artículo 137 ibídem** si de la demanda se desprende que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, que en el presente caso es la nulidad de la cesión de un bien que aduce es de su propiedad, la demanda se tramitará conforme a las reglas del **artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso**

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA. Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA. Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03721-01(15599).

Administrativo, referente al medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, el cual señala que: "*Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño...*", lo que indica que estamos frente a un derecho de carácter subjetivo.

Así las cosas, el Despacho procederá a realizar el análisis de admisión, inadmisión o rechazo de la presente demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, de conformidad con lo señalado en los artículos 162 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Sea lo primero señalar que el Despacho es competente para conocer de la misma en razón de la cuantía, toda vez que no supera la suma de 300 Salarios Mínimos Legales Mensuales (artículo 155 numeral 3 CPACA), y en razón del territorio porque el lugar que originó el acto o hecho que dio origen a la sanción es el municipio de Argelia -Antioquia (artículo 156 numeral 8 ibídem).

3. Sobre la oportunidad para presentar la demanda indica el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), frente al medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho lo siguiente:

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales (...)" (Negrilla del Despacho)

Doctrinariamente se ha considerado respecto del fenómeno jurídico de la caducidad, que obedece a la necesidad del Estado de imprimirle estabilidad a las situaciones jurídicas, acabando con la duda de que sus actos puedan llegar a ser anulados en cualquier tiempo, una vez expedidos. También se ha sostenido que el fin de la caducidad es el de preestablecer el tiempo en el cual el derecho debe ser ejercido y para darle así firmeza a las situaciones jurídicas.

La Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el tema de la caducidad para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ha sostenido que *"...Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Iniciado el término con la publicación, notificación o comunicación. Lo que ocurra de ahí en adelante no tiene virtualidad alguna para modificar el plazo perentorio y de orden público señalado por la ley. El término se cumple inexorablemente..."*².

Posición que ha sido asumida por la Corte Constitucional quien frente al fenómeno jurídico de la Caducidad ha expresado lo siguiente:

"La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso Administrativas (artículo 136 del Código Contencioso Administrativo), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".³ (Negrillas del Despacho)

En conclusión, la caducidad consiste entonces en la extinción del derecho a la acción, por vencimiento del término concedido para ello.

2 Sentencia del 21 de noviembre de 1991. Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas.

3 Corte Constitucional Sentencia C-565 de Mayo 17 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Toda vez que el artículo 164 del CPACA señala que la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho se podrá presentar dentro de los cuatro meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución publicación del acto administrativo demandado, pasará el Despacho a determinar si la demanda se presentó en el término oportuno.

Desciendo al caso concreto se tiene que los actos administrativos atacados contenidos en las Resoluciones No: **049 de 29 de Agosto de 2010, 036 de 17 de Julio de 2010 y 059 de 20 de agosto de 2011**, fueron expedidos y notificados hace más de cuatro meses, por lo que siendo el último acto administrativo (Resolución No. 059 del 20 de agosto de 2011) expedido en el mes de agosto de 2011, en principio la parte actora tendría hasta el mes de diciembre de 2011 para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, so pena de que operara la caducidad de conformidad con lo prescrito en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, antes reseñado.

Así las cosas, la demanda que en este momento ocupa la atención del Despacho, presentada en la oficina de apoyo judicial de los Juzgados Administrativos el día 15 de agosto de 2013⁴, fue presentada por fuera del término establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, se concluye que en el presente caso, operó el fenómeno jurídico de la caducidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho; en consecuencia se impone el rechazo de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 169 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**.

Finalmente frente a la pretensión de nulidad de la escritura pública No. 110 de agosto 10 de 2010 expedida por la Notaria única de Argelia Antioquia y la Nulidad de la Matricula inmobiliaria Nro. 028-28037, expedida el 24 de agosto de 2010 en la Oficina de Registros de I.I.P.P. de Sonsón, Antioquia,

⁴Folio 12.

es necesario advertir que los mismos no son objeto de control por esta jurisdicción por tratarse de documentos privados, como lo señalado el Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de 2011 Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO, en la cual se indicó:

“Sea lo primero advertir que según lo dispuesto en el artículo 22 y del Decreto Ley 1250 de 1970, por medio del cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, el proceso de registro de un título se compone de las etapas de radicación, calificación, inscripción y constancia de la inscripción.

Los artículos 24, 25 y 26 del Decreto Ley 1250 de 1970, establecen que surtida la radicación del documento, éste pasa a la sección jurídica de la oficina respectiva, para su examen y calificación, etapa en la que se identifican los títulos susceptibles de registro, se clasifican por su naturaleza jurídica y se ubican en la sección o columna correspondiente, de acuerdo con el artículo 7º del mismo Estatuto⁵.

Ahora bien, esta Corporación ha indicado que la etapa de calificación y examen de los actos jurídicos sujetos a registro y protocolizados a través de escritura pública, no se extiende al estudio de legalidad y validez del acto mismo, por cuanto, tratándose de documentos privados, dicho estudio es competencia del juez ordinario, salvo que el acto protocolizado consista en (i) un acto administrativo o (ii) contrato estatal⁶.

En efecto, en sentencia de 23 de octubre de 2003 (M.P. Olga Inés Navarrete Barrero)⁷ la Sala indicó que la etapa de calificación de los actos sujetos a registro, no comprende el examen de validez de las escrituras públicas que los contienen, por cuanto ello implicaría la invasión del ámbito de competencia del juez ordinario:

⁵ ARTICULO 7o. El folio de matrícula inmobiliaria constará de seis secciones o columnas, con la siguiente destinación:

La Primera columna, para inscribir los títulos que conlleven modos de adquisición, precisando el acto, contrato o providencia.

La Segunda columna, para inscribir gravámenes: hipotecas, prendas agrarias o industriales de bienes destinados al inmueble o radicados en él, actos de movilización, decretos que concedan el beneficio de separación.

La Tercera columna, para la anotación de las limitaciones y afectaciones del dominio: usufructo, uso y habitación, servidumbres, condiciones, relaciones de vecindad, condominio, propiedad horizontal, patrimonio de familia inembargable.

La Cuarta columna, para la anotación de medidas cautelares: embargos, demandas civiles, prohibiciones, valorizaciones que afecten la enajenabilidad.

La Quinta columna, para inscribir títulos de tenencia constituídos por escritura pública o decisión judicial: arrendamientos, comodatos, anticresis, derechos de retención.

La Sexta columna, para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio.

⁶ Al respecto, en Sentencia de 31 de marzo de 2005 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Expediente N° 1999 - 2477) se dijo: “(...) se infiere que la escritura pública no es en sí misma un acto administrativo, luego no es susceptible de ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que sí puede ser enjuiciado ante esta jurisdicción es su contenido siempre y cuando éste consista en un acto administrativo o un contrato estatal, dicho de otra forma, que la declaración que contenga y que mediante ella ha sido protocolizada constituya un acto administrativo o un acuerdo de voluntades en la que intervenga una entidad estatal.”

⁷ Expediente N° 1997-5610, Actor: Diego Arbeláez Jaramillo

*“Como bien lo señala el recurrente en su escrito, las escrituras son documentos privados cuya examen de legalidad le corresponde a la jurisdicción ordinaria, razón por la cual no le es dable a esta jurisdicción entrar a pronunciarse sobre el contenido de las mismas (...) **Es cierto que a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos les compete calificar las distintas clases de títulos, pero ello no significa que deban adentrarse sobre la legalidad de las mismas, pues, de hacerlo, usurparían la competencia de los jueces ordinarios.**”*

La Sala ha dicho, igualmente, que el examen y calificación que efectúa la sección jurídica de las Oficinas de Instrumentos Públicos, “(...) no puede ir más allá de verificar la naturaleza del acto y su registrabilidad y proceder de conformidad (...)”⁸, lo que no significa que la calificación a la que hacen referencia los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos sea una función mecánica, puesto que a los Registradores se les habilita para realizar una valoración jurídica que les permita determinar “(...) Si la inscripción del título es legalmente admisible, según preceptúa el artículo 37 del decreto ley 1250 de 1.970, así como determinar la naturaleza jurídica del acto con miras a su ubicación en la clasificación y columnas pertinentes (artículo 25 ibídem) y, si procede su registro, según los términos del artículo 52 ibídem”⁹ (Negrillas del Despacho)

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN,**

RESUELVE:

I.- **RECHAZAR DE PLANO** la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento de Derecho interpuesta por **GUSTAVO DE JESÚS LÓPEZ OSORIO**, contra **MUNICIPIO DE ARGELIA** por encontrarse caducada la acción, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de ésta providencia.

II.- **DEVOLVER** los anexos, sin necesidad de desglose.

III. En firme esta providencia procédase al archivo del expediente.

⁸ Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 5 de marzo de 5 de noviembre de 1998, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa. Expediente N° 5134.

⁹ Íbidem

IV.- Se **RECONOCE** personería al abogado **CARLOS MARIO GIRALDO PIEDRAHITA**, con tarjeta profesional número 43.370 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para representar a la parte demandante en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE.-

La Juez,

LEIDY JOHANA ARANGO BOLÍVAR

CVG

<p style="text-align: center;">NOTIFICACIÓN POR ESTADOS ELECTRÓNICOS</p> <p style="text-align: center;">JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN</p> <p>CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADOS ELECTRÓNICOS el auto anterior en la siguiente dirección electrónica: http://www.ramajudicial.gov.co/csj//publicaciones/ce/seccion/399/1174/2508/Estados-electr%C3%B3nicos.</p> <p style="text-align: center;">Medellín, 08 de octubre de 2013. Fijado a las 8.00 a.m.</p> <p style="text-align: center;">_____ KENNY DÍAZ MONTOYA Secretario</p>